

C.A de Santiago.

Santiago, quince de marzo de dos mil veinticuatro.

Vistos:

Se sustanciaron estos autos RIT O-1720-2022, ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, caratulados “CALDERON / ISAPRE VIDATRES S.A.”, en procedimiento de aplicación general sobre acción declarativa y cobro de indemnización convencional por años de servicios.

Por sentencia de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, la magistrada doña Pía Alejandra Droghetti Fuentes, rechazó la excepción de falta de interés procesal deducida por VIDA TRES S.A. Enseguida, acogió la demanda interpuesta, declaró que tienen el derecho a percibir la indemnización convencional por años de servicios contenida en el artículo 31 del Contrato Colectivo de fecha 8 de mayo de 2020, celebrado entre Vida Tres S.A. y el Sindicato Interempresas de Isapre Vida Tres S.A., Banmedica S.A. y Otros, y en consecuencia, la demandada tiene la obligación de pagarles aquella, al terminar la relación laboral y contra firma de amplio finiquito. Debiendo calcularse dicha indemnización en los términos expresados en el artículo 172 del Código del Trabajo, siendo aplicable al cálculo de las remuneraciones mensuales el límite de 90 Unidades de Fomento contenida en dicha disposición.

Contra ese fallo la parte demandada dedujo recurso de nulidad, fundando su arbitrio en dos causales, las que interpone de manera subsidiaria: (i) vicio de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, por haber sido dictada la sentencia con infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación con los artículos 1545 y 1560, ambos del Código Civil; (ii) causal de nulidad del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, por haberse extendido la sentencia a puntos no sometidos a su decisión.

Solicita que se anule la sentencia impugnada, y en su reemplazo se declare el rechazo íntegro de la demanda puesto que la relación laboral de las demandantes se mantiene vigente, lo que hace improcedente la pretensión demandada, con expresa condena en costas; en subsidio de lo anterior, pide que se anule la sentencia por incurrir en dicho vicio, y en su



reemplazo declarar que la demanda debe ser rechaza en todas sus partes, con expresa condena en costas.

Declarado admisible el recurso se procedió a su vista, oportunidad en que alegaron los apoderados de ambas partes.

Considerando:

(i) Vicio de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo.

Primero: La parte demandada funda su recurso por haber sido dictada la sentencia con infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación con los artículos 1545 y 1560, ambos del Código Civil, pues se atenta contra la regla contractual definida por las partes, y que es intangible para el juez de la causa.

Refiere que la sentenciadora rechaza la excepción de falta de interés procesal, para acto seguido acoger la demanda, en cuya virtud declara que las demandantes tienen el derecho a percibir la indemnización convencional por años de servicios contenida en el artículo 31 del Contrato Colectivo de fecha 8 de mayo de 2020, celebrado entre Vida Tres S.A. y el Sindicato Interpresas de Isapre Vida Tres S.A., Banmedica S.A. y Otros, y en consecuencia, su parte tiene la obligación de pagarles aquella, al terminar la relación laboral y contra firma de amplio finiquito, debiendo calcularse dicha indemnización en los términos expresados en el artículo 172 del Código del Trabajo, siendo aplicable al cálculo de las remuneraciones mensuales el límite de 90 Unidades de Fomento contenida en dicha disposición.

Asevera que desecha así la defensa planteada por su parte, consistente, que en la especie no se reúne la condición esencial pactada entre las partes, cuál es, que la relación laboral se encuentre terminada legalmente.

A mayor abundamiento, indica que el tenor de la cláusula 31 del contrato colectivo suscrito con el Sindicato Interempresa de las Isapres Vida Tres S.A., Banmedica S.A. y Otros, con fecha 08 de mayo de 2020, estipula como requisito sine qua non que la indemnización por años de servicios, sólo procederá cuando la relación laboral termine. Al efecto, precisa la cláusula en comento.



Señala que se advierte así que la regla contractual, exige la terminación del contrato de trabajo, y en cuya virtud, procederá la indemnización convencional, en los casos allí descritos, entre ellos el cumplimiento de la edad legal para jubilarse. Ergo, no basta con cumplir con la edad legal para jubilarse, la cual no constituye una causal de terminación del contrato, sino que es menester el término de la relación laboral.

Refiere que quedo' como punto no controvertido la existencia de una relación laboral con las demandantes y que se encuentra vigente, y aún más, aquello es reconocido por el propio Considerando Séptimo de la impugnada sentencia, en consecuencia, en la especie no se constata algún término de relación laboral, ni mucho menos, que esta sea por mutuo acuerdo de las partes.

De acuerdo al tenor de la cláusula 31 del contrato colectivo en alusión, señala que es claro en determinar los requisitos o presupuestos para que el trabajador tenga derecho a dichos beneficios, de los cuales en forma parcial reconoce la sentenciadora, incurriendo con ello, en el vicio denunciado puesto que omite reconocer íntegramente la regulación contractual, que para estos efectos es una ley para las partes como para la propia sentenciadora.

En efecto, el Considerando Décimo de la impugnada sentencia, tras transcribir la estipulación en análisis, concluye que son requisitos para la procedencia de la “indemnización por años de servicios”: la existencia de un contrato vigente por más de un año; encontrarse en el listado Anexo B del instrumento colectivo; se constate la jubilación por invalidez, edad o muerte del trabajador.

Sin embargo, asevera que la sentenciadora hace caso omiso al tenor literal de la cláusula 31 en comentario, y adicionalmente, olvida también la naturaleza jurídica de la indemnización por años de servicios (que surge una vez terminada una relación laboral), puesto que la sentenciadora abiertamente evita incluir como un presupuesto o requisito sine qua non, que la relación laboral haya terminado, lo que atenta contra las reglas de interpretación del artículo 1560 del Código Civil, como asimismo, desprecia



la regla contractual pactada entre las partes, para imponer su personal interés con infracción del artículo 1545 del Código Civil.

En efecto, precisa que a la sentenciadora en grave infracción a las normas legales antes referidas, se le olvido el pequeño detalle que para tener derecho a las indemnizaciones por años de servicios, la aludida cláusula 31 del Contrato Colectivo, exige “LA TERMINACION DEL CONTRATO DE TRABAJO”, aún más la sentenciadora en su claro intento de disfrazar su ineptitud indica contradictoriamente en su Considerando Duodécimo *“Por tanto, en dicho punto, esta sentenciadora concuerda con las alegaciones de la demandada respecto de que es necesario que se ponga término a la relación laboral para acceder al beneficio indemnizatorio, lo que no constituye un requisito de la indemnización en sí’-como se ha señalado- sino que un presupuesto para efectos de materializarlo, y en definitiva exigirse a la empresa demandada.”*

Argumenta que para la sentenciadora la terminación del contrato de trabajo, no configuraría un requisito exigible para acceder al beneficio contractual, aunque luego en forma contradictoria indica que la terminación sería un antecedente para determinar el pago de la indemnización, conclusión que evidentemente es confusa, contradictoria y equívoca, incurriendo con ello en el vicio denunciado, puesto que la sentenciadora se resiste en reconocer el alcance de la cláusula 31 del Contrato Colectivo sub lite, y en particular los requisitos definidos por la cláusula en comento.

En tal sentido, estima que de observar correctamente el artículo 1545 del Código Civil y en consonancia con el artículo 1560 del mismo cuerpo legal, forzosamente debió establecer como requisito para la procedencia de la indemnización convencional sub lite, la necesaria existencia de un término de la relación laboral.

Precisa que no se trata de una demanda de mera certeza, sino que es una demanda en donde se formulan pretensiones de condena consistente en el pago de las indemnizaciones convencionales, de manera tal que se debe establecer que en la especie se cumplan rigurosamente los supuestos definidos por las partes.



En consecuencia, refiere que necesariamente a los requisitos establecidos por la sentenciadora en su Considerando Décimo, se debe agregar que las demandantes deben acreditar la terminación de la relación laboral, puesto que lo reclamado en la especie es el pago de la indemnización por años de servicios, la que sólo procede una vez que termine la relación laboral.

Afirma que en el caso de autos, evidentemente aquello no se constata, por lo que evidentemente la demanda debió ser rechazada.

En tal sentido, argumenta que se infringe el artículo 1545 del Código Civil, precisando que de la anterior norma se constata que el contrato y sus cláusulas, que se haya pactado entre las partes, es una verdadera ley privada, que deben observar no sólo los contratantes, sino que también es oponible a la propia sentenciadora, quien debió procurar por el reconocimiento de la estipulación contractual, exigiendo al efecto en la condena y parte resolutive de la sentencia, que se verifique la terminación de la relación laboral, puesto que así se exige en la cláusula que sanciona la sentenciadora, y en consecuencia, es una ley privada que debe ser respetada por la sentenciadora, que es lo que se conoce como el principio de intangibilidad de los contratos.

A su turno, cita el artículo 1560 del Código Civil. Al efecto, señala que la interpretación del alcance contractual de la cláusula 31 del Contrato Colectivo, debe observar el tenor literal estipulado por las partes, salvo que en la especie aparezca claramente una intención distinta, aspecto último que no se constata en la especie, puesto que existen interpretaciones opuestas entre las partes, por lo que se deberá estar al tenor literal de la cláusula. Dicho sea, que esta regla de interpretación es absolutamente aplicable en la especie, puesto que la cláusula en comento regula un beneficio que excede el estándar mínimo de los derechos mínimos o básicos de los trabajadores, y aún más, la cláusula en análisis emana de un contrato colectivo suscrito con un sindicato, y por tanto, en condiciones de simetría contractual, por lo que resulta plenamente aplicable en la especie el artículo 1560 del Código Civil, y que la sentenciadora ha decidido hacer caso omiso al mismo.



En consecuencia, afirma que la sentenciadora no se encuentra autorizada para desconocer el tenor literal de las estipulaciones pactadas entre las partes, reconociéndole a la misma el valor de una ley para las partes e incluso para el mismo juez, máxime cuando en la especie la propia sentenciadora ha sostenido en la validez de las mismas.

Asevera que la sentencia impugnada incurre en el vicio denunciado, pues condena al pago de las indemnizaciones por años de servicios, por el hecho que las demandantes cumplieron la edad legal para jubilarse o bien se han jubilado, que han prestado servicios por más de un año y figuran en el anexo B del Contrato Colectivo; sin embargo, omite grave e ilegalmente, el hecho que se exige en forma previa el término de la relación laboral, circunstancia que no se verifica en la especie, aún más es absolutamente errado el criterio de la sentenciadora en atención a que califica la exigencia de terminación del contrato de trabajo como una modalidad para la ejecución de una obligación, lo que carece de asidero, puesto que en todo momento el beneficio pretendido corresponde a una indemnización por años de servicios, la que exige como requisito sine qua non la existencia de un despido que de' derecho a tales indemnizaciones, por lo que la terminación del contrato, en todo momento es un requisito establecido por la regla contractual.

Expone que es por ello que alego'la falta de interés procesal, puesto que las actoras al no verificar los presupuestos definidos por el artículo 31 del Contrato Colectivo pertinente, no se encontraban en condiciones a exigir el derecho en comento, por lo que no podía prosperar la acción deducida, puesto que el derecho no ha devengado al no constatarse el término de la relación laboral.

Señala que en abierta infracción de ley, la sentenciadora indica que tales trabajadoras tendrían derecho a determinadas indemnizaciones, incluso si se verifica en la especie su renuncia voluntaria, aspecto que evidentemente es errado, puesto que la renuncia no da derecho a tales indemnizaciones. Aún más, sostiene la sentenciadora que el exigir el mutuo acuerdo, implica que la demandada incurriría en una condición meramente potestativa, cuestión que es errada, puesto que en la especie el mutuo acuerdo descarta



cualquier decisión unilateral del empleador. Agrega que la propia sentencia trae a colación la declaración de la testigo de la contraparte quien asevera que para acceder a un beneficio similar los administrativos deben terminar su relación laboral a través del mutuo acuerdo.

Refiere que nuevamente se aprecia un yerro de la sentenciadora que deriva de los mismos vicios denunciados, puesto que concluye que el artículo 26 del Contrato Colectivo es extensible a todos los trabajadores administrativos, pese a que dicha cláusula circunscribe el beneficio exclusivamente a dos trabajadoras. Se revela así los persistentes yerros de la sentenciadora que es subsumible en el vicio denunciado, incurriendo así en infracción de ley.

Finalmente indica que el vicio influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, toda vez que la sentenciadora ha condenado a su parte al pago de una indemnización convencional supeditándola a una futura e incierta terminación de la relación laboral, en circunstancias que ésta última no se ha concretado.

En efecto, estima que la sentenciadora accede a la demanda por constatar que las demandantes han cumplido la edad legal para jubilarse o se han jubilado, que sus contratos han estado vigentes por más de un año y que se encuentran incluidas en el listado del anexo B del instrumento colectivo, sin que se verifique en la especie que exista una terminación a la relación laboral entre las partes, circunstancia esencial para que proceda el pago de la indemnización por años de servicios.

Concluye argumentando que de haber observado correctamente las normas que detalla en su recurso, es insoslayable que la demanda deducida por las demandantes debe ser rechazada, puesto que no existe en la especie una terminación de la relación laboral que de' derecho al pago de una indemnización convencional.

Segundo: Que como reiteradamente se ha sostenido por esta Corte, la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, sobre infracción de ley, tiene como finalidad velar porque el derecho sea correctamente aplicado a los hechos o al caso concreto determinado en la sentencia. En otras



palabras, su propósito esencial está en fijar el sentido, alcance y sentido de las normas, en función de los hechos que se han tenido por probados.

Tercero: Que, en síntesis, el reproche que la recurrente realiza dice relación con la interpretación que la sentenciadora de base efectuó respecto de los contratos que motivaron la presentación de la demanda.

Que dicha tarea hermenéutica es una cuestión de hecho y no de derecho, por lo que la infracción de las reglas pertinentes del Código Civil no puede fundar un recurso de nulidad basado en una causal de fondo. La jueza no infringe las reglas de interpretación contractual cuando hace el ejercicio de exégesis, sino que las cumple cabalmente, asignándole un alcance y sentido a las respectivas convenciones puestas en conocimiento del tribunal, frente al desacuerdo de las partes, las que precisamente por tal desacuerdo acuden ante el juez.

La circunstancia de que sea una cuestión de hecho, impide al tribunal de anulación inmiscuirse en la interpretación, dado que para ello se debe analizar la prueba, por lo que tal cuestión queda radicada únicamente en el juez de instancia, quien es soberano en dicha tarea.

Cuarto: Que a mayor abundamiento, el recurso adolece de vicios formales insoslayables, ya que las normas cuya infracción invoca no fueron señaladas en los escritos fundamentales y menos aún fueron soporte de lo decidido en la sentencia, debiendo haber señalado las normas transgredidas por la sentenciadora y la forma en la que ello ocurrió, toda vez que el fallo impugnado se sustenta en normas de interpretación de los contratos civiles y contratos colectivos laborales, las que no fueron atacadas en el arbitrio en análisis.

(ii) En subsidio: causal de nulidad del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo.

Quinto: Que la parte demandada funda su recurso de nulidad, por haberse extendido la sentencia a puntos no sometidos a su decisión.

Refiere que la sentenciadora ha vulnerado el principio de coherencia procesal, y dicha vulneración ha implicado que su pronunciamiento se ha extendido a puntos no sometidos a su decisión.



Señala que las actoras claramente deducen una acción de cobro de indemnizaciones convencional por años de servicios. A mayor abundamiento, Elizabeth Calderón, reclama por 27 años de servicios la suma de \$60.257.844.-; Myrtha Escobedo, reclama por 18 años de servicios la suma de \$109.837.926.-; y, María Cristina Boórquez, reclama por 17 años de servicios la suma de \$26.884.452.-

Indica que las demandas presentadas por las demandantes indican expresamente en la presuma y suma que interponen una acción de cobro de prestaciones, lo que es refrendado por su petitorio en donde expresamente señalan que interponen demanda por cobro de indemnización convencional por años de servicios y de prestaciones laborales en procedimiento de aplicación general, para acto seguido, solicitar la condena por los montos antes referidos. Ergo, estima que no se está ante una demanda de mera certeza.

Sostiene el libelo pretensor, que tiene derecho a dicha indemnización convencional, conforme a lo regulado por la cláusula 31 del Contrato Colectivo de fecha 08 de mayo de 2020, suscrito entre la Isapre Vida Tres S.A. y el Sindicato Interempresa de las Isapres Vida Tres S.A., Banmedica y Otros.

Precisa que se indicó que las actoras al tener un vínculo laboral vigente, no cumplían con los requisitos exigidos por la aludida cláusula 31 del contrato colectivo y, asimismo, no se verificaba el interés procesal, puesto que el derecho reclamado aún no se devengaba, por lo que correspondía el rechazo de la demanda.

Estima que como se aprecia la litis trabada consiste en determinar en la especie si las demandantes cumplen con los presupuestos de la estipulación contractual, para así reclamar las indemnizaciones convencionales conforme a los montos demandados o lo que correspondiere conforme a derecho.

Indica que en atención a lo antes señalado, es que se fija como punto de prueba: (1) Hechos o antecedentes que darían cuenta de la procedencia de las indemnizaciones a que pudieran acceder las demandantes. (2) Términos o estipulaciones del contrato colectivo, particularmente la cláusula



trigésimo primera. En su caso, hechos o antecedentes que daría cuenta de la existencia de algún vicio que la hiciera anulable. (3) Estipulaciones de la relación entre la demandante y la demandada, remuneraciones pactadas y efectivamente percibidas para efectos de base de cálculo de las eventuales indemnizaciones.

Expone que aparece con claridad que el objeto del juicio es obtener la condena de la demandada, ordenando el pago de las indemnizaciones por años de servicios convencional a causa del término de la relación laboral.

Asevera que la sentenciadora se aparta de reconocer este aspecto que configura en definitiva la litis, para luego sostener que estamos en presencia de una acción de mera certeza, lo que no es efectivo.

De este modo, considera que la sentenciadora incurre en el vicio en comento, puesto que accede a la demanda, pese a que no se constata el término de la relación laboral, y en su intento de justificar su resolución ordena que la indemnización deberá calcularse y pagarse una vez que se concrete el término de la relación laboral, sin que se establezca con la certeza necesaria la fecha de término de la relación laboral.

Cita al efecto el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales, el artículo 76 inciso 2° de la Constitución Política de la Republica, argumentando que la competencia del juez se deberá ceñir rigurosamente al litigio sometido a su conocimiento, y cuyos límites estarán definidos por la demanda y en especial por su respectiva parte petitoria, teniendo en consideración las defensas contenidas en la respectiva contestación, resultando vedado al juez ejercer su función jurisdiccional excediéndose a otros aspectos y en el cual no ha sido llamado a resolver, y en donde naturalmente, el legislador no le confiere facultades para obrar de oficio.

Sexto: Que el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo señala que *“El recurso de nulidad procederá, además: e) Cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 o 501, inciso final, de este Código, según corresponda; contuviese decisiones contradictorias; otorgare más allá de lo pedido por las partes, o se extendiere a puntos no sometidos a la decisión del tribunal, sin*



perjuicio de las facultades para fallar de oficio que la ley expresamente otorgue”.

Que el fundamento de la causal de nulidad invocada, radica en que la demanda debió rechazarse al no reunirse en la especie los requisitos exigidos para que las demandantes tuviesen derecho a la indemnización convencional solicitada por encontrarse la relación laboral vigente entre las partes, estimando que la acción impetrada corresponde a una demanda de cobro de prestaciones y no a una solicitud de declaración de mera certeza.

Séptimo: Que las demandantes solicitaron al Tribunal en su demanda lo siguiente: “... *Que las suscritas tenemos derecho al beneficio de indemnización convencional por años de servicios que hemos señalado y que en atención a que ya hemos cumplido la edad legal de jubilación y/o estamos jubiladas, el empleador sea condenado a pagarnos dicha jubilación equivalente a 30 días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio y fracción superior a 6 meses, prestados continuamente a la empresa, contra firma de amplio finiquito.*” , por lo tanto la litis se trabó sobre esa petición, pronunciándose la sentenciadora sobre aquello, ordenándose el pago de aquellas indemnizaciones una vez que se termine la relación laboral entre las partes, por lo que la causal en estudio será rechazada, al haberse dictado la sentencia sobre los hechos debatidos en el juicio.

Distinto es que la demandada esté en desacuerdo con lo decidido, argumentando nuevamente que la sentenciadora consideró un requisito que a su juicio no corresponde para efectos de acceder a la obtención de las indemnizaciones convencionales pedidas, intentando nuevamente modificar los hechos fijados en la sentencia impugnada, planteando discrepancias con lo concluido en el fallo recurrido, lo que no es propio de la causal invocada, siendo este un recurso de derecho estricto.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 477 y 482 del Código del Trabajo, **se rechaza con costas** el recurso de nulidad deducido por la parte demandada, en contra de la sentencia de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en causa RIT O-1720-2022.



Regístrese y comuníquese.

Redacción de la Ministra (s) María Teresa Quiroz Alvarado.

N° Laboral-Cobranza 114-2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BHYSXMXWLNJ

Pronunciado por la Décima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Mario Rojas G., Ministra Suplente Maria Teresa Quiroz A. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, quince de marzo de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a quince de marzo de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: BHYSXMXWLNJ